

Editorial

La necesidad de reorientar la política económica

Ya desde la década de los cincuentas, la modernización del Estado fue comprendida como un instrumento necesario para lograr un desarrollo eficaz en América Latina. En aquel tiempo dicha modernización estaba en función de un proyecto de desarrollo económico específico, que fue la industrialización por sustitución de importaciones basado en la protección y expansión del mercado interno. Ahora nuevamente está de moda el proceso de modernización del Estado, sin embargo la oposición política le pregunta al gobierno de turno cuál es el proyecto de desarrollo que orientará a la modernización.

Al actual gobierno se le ha criticado por no contar con un plan de desarrollo quinquenal en forma clara, como lo tuvo, por ejemplo, el gobierno de Cristiani. También se le ha criticado por no haber promovido una consulta nacional que tenga como fruto una visión estratégica de El Salvador. Ciertamente el gobierno posee ambos vacíos, pero esto no implica necesariamente que no tenga una orientación clara de la política económica.

Por una parte, el actual gobierno le ha dado continuidad a los componentes básicos del modelo llamado neoliberal impulsado por la administración Cristiani. Estos componentes son la tendencia de la no intervención del Estado en la economía ni como productor ni como vendedor, lo cual implica proseguir con el proceso de privatización de las empresas estatales; la tendencia que el mercado se convierta en el único asignador de recursos y fijador de precios; y la tendencia a la apertura total de la economía al resto del mundo. Por otra parte, el gobierno está intentando reorientar el anterior modelo. En la administración Cristiani se pretendió convertir a las exportaciones agrícolas no-tradicionales en el motor del crecimiento económico, lo cual no se logró en parte debido a la

sobrevaloración del colón. La fuerte entrada de capital del exterior, el gran incremento del crédito y el cambio de expectativas provocado por la finalización de la guerra estimuló fuertemente el consumo, cosa que a su vez favoreció a los siguientes sectores no-transables de la economía: servicios, comercio y construcción. El crecimiento económico experimentado en los años pasados descansó en el auge del consumo descuidando a los sectores agropecuario e industrial. De ahí que, la crisis actual no tiene un carácter coyuntural.

El actual gobierno, basado en una visión optimista del proceso de globalización, cree que si El Salvador acelera las medidas de apertura de la economía, mediante la reducción de aranceles, moderniza la infraestructura de servicios tales como telecomunicaciones, puertos y electricidad, mediante la privatización de dichos servicios y disminuye las "barreras" a la inversión extranjera, como por ejemplo, las tasas de impuestos directos, esta inversión vendrá en gran cantidad a El Salvador y todos saldremos beneficiados. Bajo esta lógica se pueden comprender las medidas que anunció en enero de 1995. Por ejemplo, la intención de dolarizar la economía tenía como una de sus finalidades que el riesgo cambiario fuera igual a cero para los inversionistas extranjeros. El incremento del IVA, que acentuó la inequidad del sistema tributario salvadoreño, tuvo la doble finalidad de compensar la pérdida de ingresos por la desgravación arancelaria e incrementar las recaudaciones, con el objetivo de realizar las inversiones en infraestructura y servicios necesarias para volver más atractivo el país a la inversión extranjera. De tal forma que la política económica se encamina, como lo expresó el gobierno a inicios de 1995, a convertir a El Salvador en una gran zona franca.

Diferentes sectores de la sociedad salvadoreña han externado sus críticas y preocupaciones ante esta reorientación del rumbo de la economía. En una visión crítica del proceso de globalización se reconoce que sí existen sectores perdedores. Los sectores empresariales que destinan su producción al mercado interno o centroamericano, que no pueden competir ni en calidad ni en precios a nivel internacional, son perdedores. Así podemos explicar por qué la ANEP y la ASI le han solicitado al gobierno que desacelere el proceso de desgravación arancelaria y que impulse medidas sectoriales para apoyar su reconversión productiva. Los sectores históricamente marginados, como por ejemplo, la pequeña y micro empresa se sienten fuertemente amenazados en su sobrevivencia. La generación de empleos por la inversión extranjera ha sido principalmente por medio de las maquilas. Estas han generado empleo, empleo mal remunerado, en algunos casos violando normas del Código de Trabajo, y no han ofrecido una capacitación que cambie cualitativamente la productividad del trabajador.

Actualmente, la gran mayoría de salvadoreños nos encontramos afectados por el fuerte incremento en el costo de la vida; los asalariados estamos experimentando una gran reducción del poder de compra. La delincuencia es el proble-

ma más angustiante y es también el “arancel” más alto a la inversión extranjera. La gran mayoría de salvadoreños percibimos que las condiciones para sobrevivir serán más difíciles y que la desigualdad económica está creciendo. Un estudio reciente del BID revela que altos niveles de desigualdad limitan el ritmo y la sostenibilidad del crecimiento económico.

Con base en este análisis podemos afirmar que es necesario reorientar a la política económica con medidas encaminadas a: (a) incrementar las tasas de crecimiento económico por medio de reducir los niveles de consumo agregado, tanto privado como público, elevando así los niveles de ahorro nacional para financiar la inversión; (b) reorientar el flujo de remesas a la inversión; (c) desarrollar políticas sectoriales en favor de la micro y pequeña empresa; (d) incentivar las exportaciones agropecuarias e industriales; y (e) vigilar las condiciones laborales en las maquilas.

Además es necesario diseñar un plan estratégico nacional con visión de largo plazo que sea fruto del consenso de las fuerzas políticas y sociales más representativas. Un aspecto esencial a consensuar es el papel del Estado en la economía y en qué debe consistir su modernización, la que no debe confundirse con la privatización *per se* de las empresas públicas. Otro aspecto esencial es cómo articular medidas que estimulen el crecimiento económico y al mismo tiempo mejoren la distribución del ingreso y reduzcan los niveles de pobreza.

Según la encuesta de la UCA, que evaluó los dos años de la administración de Calderón Sol, el 61.1 por ciento de los consultados consideró que la situación económica del país ha empeorado desde que tomó posesión esta administración y el 77.4 por ciento piensa que el país necesita un cambio de rumbo. De esta forma, el reto queda planteado al gobierno y el pueblo juzgará su actuación.

